



NARRATIVA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN EL CORREDOR DEL CESAR



Observatorio de
**Transformaciones
Territoriales**



ICS



INSUCO



PROGRAMA DE
DESARROLLO Y PAZ
DEL CESAR Y LA GUAJIRA
Organismo Promotor y Operador Integral
en desarrollo social y rural



**Ford
Foundation**

NARRATIVA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN EL CORREDOR DEL CESAR

Autora:

Mariana Torres Gómez - Directora del Observatorio de Transformaciones Territoriales

Coordinación institucional y metodológica:

Paula Carranza - Coordinadora de proyectos Insuco Colombia

Julián Zapata - Analista de Proyectos ICSI

Jonatan Andrés Tovar Castilla - Coordinador del área de desarrollo sostenible del PDPCG

Yareth Tellez Acosta - Equipo PDPCG

Alicia Esther Jiménez Escorcía - Enlace territorial PDPCG

Juan Fernando Botero - Consultor EITI

Nelson Ivan Arango Castrillon - Líder territorial EITI

Revisión:

Jeanette Moreno Torres - Directora de Alianzas Estratégicas y Gestión del Conocimiento ICSI

Arianna Espinosa Oliver - Directora Regional de Insuco para Colombia, Centroamérica y México

Amaury Padilla Cabarcas - Director Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira

Emmanuel Aguilar Burgoa - Oficial de país para América Latina y el Caribe Secretaría Internacional EITI

Organizaciones sociales participantes:

Este proceso contó con la valiosa participación de organizaciones comunitarias, étnicas, sociales, productivas, juveniles y sectoriales del territorio, que contribuyeron desde su experiencia, conocimiento y visión local a la construcción de esta narrativa de la Transición Energética Justa en el Corredor del Cesar. Entre ellas se encuentran:

Consejo Comunitario Alejo Durán, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienenergetica), Promotora de Desarrollo Local de La Loma - 32 (PDL-32), Juntas de Acción Comunal, Red de Mujeres del municipio de El Paso (Redmupas), Asociación de centros habitacionales y habitaciones de La Loma (Ahabiloma), Consejo Comunitario de Comunidades Afrocolombianas de La Victoria de San Isidro (COAFROVIS), Asociación de Campesinos de La Victoria De San Isidro La Union Del Campo, Asociación de Técnicos, Profesionales y Productores en pro de la Serranía del Perijá (ASOTEPROS), Asociación de Productores Agropecuarios de La Jagua de Ibirico (ASOJAGUAIB), Comité de Turismo Comunitario Serrania del Perijá, Organización Juvenil Líderes Nexus, Asociación Central Agropecuaria Y De Víctimas De La Jagua De Ibirico Cesar (ASOCECAVIJ), Asociacion De Productores Agricolas Y Pecuarios Del Cesar (ASPRACES), Comité Municipal de Reforma Agraria de La Jagua de Ibirico, Asociación Municipal de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de La Jagua de Ibirico (ANMUCINJA), Asociación de Mujeres campesinas visión de futuro (ASOMUCAVIF), Mesa Municipal de Víctima de La Jagua de Ibirico - Desplazamiento Forzado, Consejo Comunitario de La Jagua de Ibirico, Asociaciones Humanitarias, De Cooperación, De Acción Social en La Jagua de Ibirico (COACNEJA), Asociación de Agroproductores y Servicios de Boquerón (ASPROSERB), Resguardo Indígena Campo Alegre, Asociación Verde Campesina de Becerril (ASOVECAB), Asociación de Sujeto de Reparación Colectivo de Estados Unidos y sus veredas (ASOREVEV), Junta de Acción Comunal Capihuara,

Fundación Cultural Afro desendiente de Becerril (Maculele), Asociación de Etnoeducadores del Municipio de Becerril - Cesar (ASOETBEC), Consejo Municipal de Juventud del municipio de Becerril, Asociación Resguardo de la Comunidad Indígena Wayu en Becerril (ASOTCOWAYUBE).

Actores institucionales y sectoriales que contribuyeron al proceso:

Como parte del proceso de construcción de esta narrativa, se realizaron entrevistas con representantes de entidades del sector público, empresas del sector energético y minero, así como organizaciones de cooperación internacional y centros de investigación. Sus aportes permitieron integrar perspectivas institucionales al análisis multiactor de la Transición Energética Justa en el Cesar.

Entre las instituciones entrevistadas se encuentran:

El Ministerio de Minas y Energía (equipos de Comunidades Energéticas y Distritos Mineros), la empresa Colombian Natural Resources (CNR), la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), la empresa Drummond Ltd., la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), la Universidad de Santander sede Valledupar (UDES) y la Universidad Nacional de Colombia sede La Paz.

Colombia, Octubre 2025

*Tuvieron que pasar treinta
para venir a empezar
lo que ahora mucho más cuesta
ser un desafío lograr.
Se fue la oportunidad
y solo se mira espuma
hoy hacerlo con las uñas
es como nos va a tocar.
El panorama es nublado
desde muy lejos se ve
que esto ha quedado al revés
con todo lo que ha pasado
se nos dañó el paraíso
la casa se esmigajó
el volver como al principio
será pintá una ilusión...*

*sin título,
por José Gómez Maestre, declamado el 6 de Agosto de 2025
en el Tercer Encuentro del Proyecto Narrativas del Territorio.
Valledupar, Cesar.*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
GOBERNANZA PARTICIPATIVA CON ARRAIGO TERRITORIAL	8
EDUCACIÓN CON IDENTIDAD, PERTINENCIA Y PROYECCIÓN PRODUCTIVA	13
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DESDE EL TERRITORIO	18
DIVERSIFICACIÓN CON RAÍCES EN EL TERRITORIO	25
ENERGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL	29

INTRODUCCIÓN

La construcción de la Narrativa de la Transición Energética Justa (TEJ) en el Corredor del Cesar, comenzó con una pregunta, ¿cómo se ve, cómo se siente y cómo se construye una transición energética que sea verdaderamente justa?

Durante 2025, en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, esa pregunta fue el punto de partida de talleres participativos, entrevistas y encuentros multiactor. Allí se tejieron las voces de jóvenes, mujeres, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de víctimas del conflicto y de asociaciones productivas, junto con representantes de instituciones públicas, empresas privadas, gremios, la academia y organizaciones no gubernamentales (ONG). Cada uno con una historia y una apuesta para abordar la transición energética.

El proceso fue liderado por el Centro Insuco para la Innovación Social (ICSI) y el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y la Guajira (PDPCG), a través del Observatorio de Transformaciones Territoriales (OTT), la Ini-

ciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y la Secretaría Técnica de EITI Colombia, con el apoyo financiero de la Fundación Ford.

La construcción de esta narrativa se desarrolló en tres fases. La primera estuvo centrada en la sociedad civil, a través de talleres presenciales realizados en los tres municipios. Mediante ejercicios narrativos, diagnósticos participativos, debates colectivos y propuestas prospectivas, se construyeron visiones compartidas sobre el pasado reciente y el futuro deseado. La segunda fase consistió en un proceso de contraste con el sector público y privado, a través de entrevistas semiestructuradas donde se presentaron las propuestas de la sociedad civil, permitiendo incorporar nuevas voces, reconocer tensiones y profundizar los puntos de convergencia. Finalmente, se llevó a cabo un encuentro intersectorial que permitió consolidar una narrativa compartida, alineada con los desafíos, oportunidades y apuestas de una transición energética construida desde el territorio.

El proceso se estructuró a partir del análisis de cinco dimensiones que fueron tomando forma y sentido a la luz del territorio: gobernanza, educación, sostenibilidad ambiental, economía y energía. Estas dimensiones recogen una lectura crítica del Corredor y se proponen como puntos de partida para imaginar una transición que nazca desde las realidades locales. Su selección no responde solo a la coyuntura energética, sino al reconocimiento de que una transición verdaderamente justa exige ir más allá de la energía: implica repensar cómo se toman las decisiones, cómo se construye el conocimiento, transformar las relaciones con el ambiente, revisar las bases del modelo de desarrollo, redefinir cómo se produce y se vive en el territorio, y garantizar condiciones dignas para habitarlo.

Esta narrativa nace de esos diálogos. Fue construida con voces diversas, donde conviven



acuerdos, propuestas compartidas y también disensos.

Porque la justicia no se impone: se conversa, se negocia y se camina con otros. No es un plan técnico ni un listado de demandas: es la hoja de ruta viva de un proceso colectivo que decidió pensarse el futuro desde su territorio, con sus propias palabras.

Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

GOBERNANZA participativa con arraigo territorial

Una transición energética sin participación, no puede ser justa

PROPUESTAS

Bases sólidas de diálogo

Vínculos duraderos

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO CIUDADANO

Articular y Fortalecer las **mesas técnicas multiactor**

- JAC
- Liderazgo social
- Mujeres
- Comunidades indígenas
- Afrodescendientes
- Sector público y privado
- ONGs
- Academia
- Jóvenes

INDICADORES DE CAMBIOS REALES

Incidencia en la vida cotidiana de las personas

Confianza

No se trata de crear nuevas estructuras sino transformar y articular las que ya existen

Formación de habilidades técnicas que garanticen la EQUIDAD

JAC PDET EITI CTP

VEEDURÍAS

HOJA DE RUTA CONJUNTA

TEJ

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PROFESIONALIZACIÓN de la gestión pública

Con criterios de mérito, rendición de cuentas y control ciudadano

Evidencia de cumplimiento

CONTINUIDAD de procesos más allá del gobierno de turno

Reconocer la **LA DIVERSIDAD**
Abrir espacios intergeneracionales

APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Acompañamiento por parte de organizaciones con más trayectoria para apoyar organizaciones emergentes

Liderazgos de calidad

Conversación y proceso colectivo

Resultados visibles

Información clara

Compromisos estables

SECTOR PÚBLICO

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

Herramientas para la PAZ

GOBERNANZA PARTICIPATIVA CON ARRAIGO TERRITORIAL

Las conversaciones en el territorio partieron de una primera certeza: una transición energética sin participación no puede ser justa. Para que esa participación sea auténtica y sostenida, debe estar anclada en la confianza. La confianza no es el centro de la gobernanza, pero sí la condición que diferencia un espacio genuino de uno meramente formal. Es lo que permite que los actores se sientan en libertad de expresarse con honestidad, y lo que distingue un diálogo verdadero de una participación limitada a cumplir presencia. Por eso, se coincide en la necesidad de construir confianza como base para que las decisiones sean compartidas. Para lograrlo, es necesario ampliar las formas de representación y acompañarlas con procesos pedagógicos que fortalezcan la comprensión colectiva de lo público, lo común y lo político. La gobernanza no solo depende de tener estructuras organizativas, sino de que estas sean reconocidas, abiertas y capaces de sostener vínculos de largo aliento.

Como parte de este esfuerzo, se propone articular y fortalecer mesas técnicas multiactor, con participación activa de Juntas de Acción Comunal (JAC), liderazgos sociales, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, junto con entidades del sector público a escala local y regional, empresas, ONG's, actores relevantes del sector académico, entre otros. Estas mesas no solo serían espacios de planificación, sino también de evaluación compartida y monitoreo ciudadano. Desde allí, se haría seguimiento a los impactos sociales y ambientales, no desde indicadores externos, sino

con indicadores propios. Desde allí, se haría seguimiento a los impactos sociales y ambientales, no desde indicadores externos, sino con indicadores propios, contruidos de manera que permitan establecer los cambios reales en las condiciones de vida de la población.

Esta propuesta se plantea como un camino para avanzar hacia una transición energética más legítima para las personas que habitan los municipios del Corredor del Cesar. Pero también es una forma de responder a una frustración acumulada: hoy existen múltiples comités, mesas y espacios de diálogo, como las JAC, las veedurías ciudadanas, los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), las mesas de desarrollo rural, las instancias de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la plataforma de Diálogos Improbables, el Comité Multipartícipe de EITI, entre otros. Sin embargo, lejos de complementarse, estos operan de manera desconectada y no logran que sus acciones se traduzcan en procesos que mejoren el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, la propuesta que nace de estos diálogos no busca crear nuevas estructuras, sino transformar las existentes en espacios efectivos, articulados y capaces de estructurar una hoja de ruta conjunta que incida en las decisiones alrededor de lo que significa una TEJ.

Por eso, se reitera la urgencia de que los distintos sectores se coordinen mejor, eviten la duplicación de esfuerzos y reduzcan la carga que hoy recae sobre los actores territoriales convocados una y otra vez a espacios que no dialogan entre sí. Gobernar el territorio no puede seguir siendo un ejercicio fragmentado.

Por otra parte, al hablar de gobernanza se corre el riesgo de romantizarla y reducirla a discursos con buenas intenciones o a la creación de espacios formales que suelen quedar atrapados en dinámicas de diagnóstico permanente, sin



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

avanzar hacia acciones concretas que impacten verdaderamente el territorio. Esta inercia limita la efectividad de los procesos de veeduría y control, que terminan operando sin herramientas claras para exigir cumplimiento, hacer seguimiento o incidir en la gestión pública. Esto, sumado a la debilidad de los espacios de control político —como los concejos municipales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de seguimiento— reduce las posibilidades de vigilar el uso de los recursos públicos, el cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas y la actuación de las autoridades locales y nacionales en torno a la transición energética.

Para superar estas limitaciones es necesario fortalecer las capacidades técnicas de quienes integran las instancias de participación, garantizando condiciones mínimas de equidad. En esa dirección, la academia, junto con mecanismos como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), pueden acompañar a la sociedad civil en procesos de formación sobre contratación pública y seguimiento a proyectos sociales, ambientales y de inversión, incluyendo el monitoreo al cumplimiento de obligaciones empresariales y a uso de recursos como las regalías.

De este modo, los liderazgos comunitarios, tendrían la capacidad de utilizar las herramientas disponibles para monitorear procesos y ejecución de recursos, estableciendo al mismo tiempo bases sólidas de diálogo entre la sociedad civil, el sector público y el privado.

Asimismo, se plantea la formación de los distintos actores en veedurías, con el fin de consolidar la capacidad local en este ejercicio y garantizar un seguimiento integral de los procesos en marcha y de la propia gobernanza. En esta tarea, se propone fomentar la apropiación de la información por parte de las asociaciones comunitarias con mayor trayectoria, de manera que puedan asumir un rol de acompañamiento y que puedan compartir su experiencia con organizaciones menos consolidadas. De esta manera, se fortalece la articulación de las redes de la sociedad civil, generando condiciones para orientar acciones que puedan contribuir a la gobernanza y al proceso de TEJ.

Sin embargo, este fortalecimiento no solo pasa por mejorar las capacidades técnicas, sino también por atender la calidad de los liderazgos en el territorio. Cuando no existe un compromiso

real o una representatividad amplia, se limita la capacidad de incidencia real de las comunidades y reducen su alcance institucional. Por eso, se requiere trabajar tanto en la formación de los liderazgos existentes como en la preparación de nuevos liderazgos comunitarios.

Frente a este escenario, se propone avanzar hacia una gobernanza participativa con arraigo territorial, capaz de adaptarse a las particularidades y desafíos de cada contexto, tanto locales como asociados a procesos más amplios de transición energética. En el Corredor del Cesar, esto implica reconocer la diversidad de actores y trayectorias locales, incorporar enfoques étnicos y sectoriales, y promover la participación intergeneracional, con énfasis en la formación y el empoderamiento de grupos históricamente marginados como mujeres y juventudes. En este esfuerzo, la participación de las juventudes es necesaria para asegurar la continuidad de los procesos y evitar rupturas derivadas del cambio generacional. Esto requiere reconocer sus propias formas de organización, ofrecer espacios de formación y abrir canales de incidencia que respondan a sus intereses y capacidades.

Por otra parte, fortalecer las estructuras comunitarias implica también conocer sus límites y tensiones internas. Las JAC, los Consejos Comunitarios Afro, los Cabildos Indígenas, las Asambleas Campesinas, entre otros, cumplen un papel importante en la gestión territorial, pero no siempre logran representar de forma amplia y legítima a todos los ciudadanos. En parte como resultado de condiciones estructurales que han dado lugar a dinámicas como el clientelismo, algunas organizaciones enfrentan cuestionamientos sobre su representatividad y vínculos políticos, que dificultan la construcción de confianza entre actores comunitarios, institucionales y privados.

Esto invita a preguntarse por la voluntad de los actores de participar en los espacios de diálogo. Una gobernanza con arraigo territorial debe partir de esa disposición. Un territorio donde los actores no quieren involucrarse en procesos que inciden tanto en su vida cotidiana como en el largo plazo, evidencia que no se cuenta con las capacidades adecuadas, la información suficiente y la disponibilidad para asumir procesos que suelen ser exigentes y prolongados. También pone sobre la mesa la confianza que se deposita en quienes facilitan estos espacios, en los demás sectores involucrados y en los liderazgos locales. Por eso, fortalecer la voluntad de participación implica garantizar condiciones claras de información, construir capacidades permanentes y cultivar la confianza mutua.

La confianza, sin embargo, solo puede construirse en la acción conjunta. Requiere evidencias concretas de cumplimiento, resultados visibles y continuidad en el tiempo. En la gestión pública, la inconsistencia de los programas impulsados por el Estado ha generado la recurrencia de problemas como la falta de recursos y la dificultad de respaldar procesos capaces de mantenerse en el tiempo. Superar esta situación demanda compromisos institucionales estables y mecanismos que garanticen la permanencia de los procesos más allá de los cambios de gobierno. Esto se a-



Primer Encuentro: Narrativas del Territorio, La Loma, Abril 2025

segura a través de acuerdos vinculantes y socialmente vigilados, con reglas claras, recursos garantizados y planes de largo plazo respaldados por acuerdos multiactor que obliguen a dar seguimiento a lo pactado. Solo de esa manera es posible que los actores reconozcan el esfuerzo institucional y encuentren motivos reales para confiar en los espacios y en quienes los integran.

la gobernanza como una herramienta para la paz; una gobernanza que entienda la confianza como una condición vital y diferenciadora para que la participación sea real y efectiva, y vaya más allá de la ejecución de proyectos. La transición energética no necesita más estructuras: necesita vínculos. Y esos vínculos no se decretan, se cultivan.

A esta realidad se suma la necesidad de promover un Estado más eficiente y de profesionalizar la gestión pública, es decir, dotar a las instituciones locales de capacidades técnicas, administrativas y éticas para planear y ejecutar de modo que la inversión de recursos y regalías contribuya de manera real a la transformación territorial. Esto requiere establecer estándares mínimos de formación para ciertos cargos públicos, garantizar procesos de capacitación continua, consolidar equipos técnicos con criterios de mérito y responsabilidad, y fortalecer las capacidades institucionales para la rendición de cuentas y el ejercicio efectivo de la veeduría. Sin una institucionalidad robusta, la TEJ corre el riesgo de quedar atrapada entre buenas intenciones y malas ejecuciones. A partir de todo lo anterior, se propone entender



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

EDUCACIÓN con identidad, pertinencia y proyección productiva

Condición necesaria para una
TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

IDENTIDAD

Reconocer, compartir y fortalecer
saberes propios

Formar
liderazgos
críticos

Debe
basarse en...

Diálogo
con otros

Construir
autonomía

Orientada a la
PLANEACIÓN

Educación integral

para formar conciencia individual y colectiva

Academia

Crear alternativas
frente a realidades como
la violencia, hambre y
falta de
COHESIÓN SOCIAL

PERTINENCIA

Conocimiento popular

Saberes ancestrales

Técnicas actuales

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

Análisis de mercado
e indicadores de impacto

Transición de
**capacidades
locales**

Preparar a las
comunidades
para gestionar
soluciones
energéticas

PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES

Formación certificada

Articulación entre
niveles educativos

Poblaciones rurales

Gobiernos
locales

Red de apoyo **familiar
comunitario** y de **cuidado**

Organizaciones
comunitarias

PROYECCIÓN PRODUCTIVA

FORMACIÓN PRÁCTICA

Conectada con la cotidianidad y
las vocaciones del territorio

Agroindustria

Turismo

Gestión
ambiental

Economía
circular

Valorar el
EMPLEO FORMAL

Fortalecer
economías
solidarias

Enfoque diferencial de GÉNERO

Dar respuesta a
las **demandas** del
territorio

MESAS DE TRABAJO

EDUCACIÓN CON IDENTIDAD, PERTINENCIA Y PROYECCIÓN PRODUCTIVA

Formar para la gobernanza no es suficiente. La educación no es solo un derecho sino una condición necesaria para una TEJ; una herramienta para la transformación, que permita que quedarse o irse del territorio no dependa de la falta de condiciones, sino que sea una decisión libre en una región que ofrezca futuro. Desde esa mirada, quienes participaron en la construcción de esta narrativa coinciden que lo que se necesita es una formación con identidad, pertinencia y proyección productiva.

La identidad implica que el conocimiento propio se reconozca, se fortalezca y se comparta. Que los saberes propios conversen con otros, y se transformen en un saber conjunto, construido de manera asociativa y solidaria, para quedarse y servir. Se trata de generar conocimientos desde dentro, reconociendo la memoria, las raíces culturales y la experiencia vivida. Los legados ancestrales —de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas— deben ser parte de la base viva del proceso educativo, no como un añadido simbólico, sino como fundamento para construir nuevas formas de habitar y transformar el territorio. En esta perspectiva, la identidad no sólo preserva la memoria sino que lleva a construir autonomía territorial y liderazgos críticos capaces de incidir en las decisiones y el futuro del Corredor.

La pertinencia supone que la educación tengan un carácter integral, capaz de crear conocimientos y prácticas que integren lo popular, lo ancestral y lo académico. Ese proceso

debe dialogar con la tecnificación que exige el mundo contemporáneo y orientarse a la planeación regional, local y comunitaria en el corto, mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, la pertinencia significa preparar no solo para el trabajo, sino también para el ser: una formación orientada a despertar conciencia individual y colectiva y a enfrentar los cambios estructurales que atraviesan al territorio. Estos cambios se expresan en realidades que limitan las oportunidades y el bienestar. Entre ellas se encuentran la violencia que fragmenta los vínculos comunitarios, la extorsión que ahoga las iniciativas productivas, el hambre que refleja desigualdades persistentes, la cultura de la ilegalidad que debilita la confianza social y la falta de coordinación que rompe la cohesión entre instituciones, comunidades y familias. Afrontarlos desde la educación significa formar personas capaces de reconocer esas problemáticas, cuestionarlas y construir alternativas colectivas.

Finalmente, la proyección productiva demanda que la formación tenga un componente práctico, que conecte el aprendizaje con la vida cotidiana y con las necesidades del territorio. Supone también una estrategia que articule lo que se quiere con las oportunidades reales disponibles, de modo que los procesos formativos no generen frustración sino horizontes alcanzables. En este camino, la formación debe contemplar un enfoque diferencial de género, y al mismo tiempo considerar las condiciones particulares de jóvenes y comunidades étnicas, de modo que la proyección educativa y productiva se traduzca en oportunidades reales para todos los grupos históricamente excluidos. Esto requiere no solo su preparación, sino también condiciones integrales que incluyan redes de apoyo familiar, comunitario y de cuidado que hagan posible su participación efectiva en los espacios de decisión, trabajo y transformación del territorio.

Asimismo, el territorio necesita prepararse para los cambios del mundo, lo que implica que la formación en nuevas tecnologías y economías emergentes llegue tanto a jóvenes como a personas adultas. Estas últimas no solo participan en estas transformaciones, sino que también continúan siendo formadoras en sus familias y comunidades, y requieren herramientas que les permitan acompañar a las próximas generaciones en los retos que vienen.

En esa misma dirección, la formación técnica y tecnológica en energías renovables, agroindustria, turismo rural, economía circular y gestión ambiental debe estar pensada desde las vocaciones del territorio, de modo que estas funcionen como motor para responder a los retos y posibilidades de desarrollo local. Para lograrlo, es necesario que los ejercicios de caracterización territorial que se han desarrollado en el Cesar, puedan ser el punto de partida para establecer los recursos disponibles y definir las necesidades formativas reales. Esto incluye, no sólo un análisis de mercado que permita anticipar la demanda laboral y oriente la formación hacia oportunidades de empleo, sino también la incorporación de indicadores económicos,

sociales y ambientales construidos de manera conjunta, que reflejen el impacto de la educación en la vida de las comunidades y en la sostenibilidad del territorio.

La apuesta es lograr una mayor concordancia entre la dinámica de empleo en un contexto de transición energética y productiva y la estructura educativa del territorio. Para esto, la formación debe contribuir a fortalecer los encadenamientos productivos existentes y mecanismos de economía solidaria, para aumentar la autonomía y de esta manera reducir la dependencia de un único mercado que puede ser incierto. En esa lógica, los procesos educativos deben construirse a partir de proyectos estratégicos definidos en y para cada municipio. Estos deben dialogar con las comunidades, sus apuestas colectivas, sus trayectorias de vida y las iniciativas que el sector privado pueda aportar para impulsarlos. Por eso, se propone que los programas estén anclados a emprendimientos y prácticas comunitarias, articulados con asociaciones y cooperativas de la región. Estos, a su vez, de-



Primer Encuentro: Narrativas del Territorio, La Jagua de Ibirico, Abril 2025



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

ben entender cómo funcionan los mercados externos para poder vincularse a ellos sin perder su identidad.

Al mismo tiempo, se subraya que no todo el mundo quiere o puede emprender: es igualmente necesario valorar y fomentar el empleo formal que generan las empresas privadas y la institucionalidad, reconociendo su papel estratégico en la diversificación económica y en la estabilidad laboral. En definitiva, la formación debe estar vinculada a procesos sociales vivos, con rutas claras para la inserción productiva y el cuidado del territorio.

En esa misma línea, aunque se coincide en que

los sistemas energéticos no deben ser el centro de la formación, sí se propone que las comunidades puedan prepararse para encargarse de la instalación, operación, mantenimiento y reciclaje de soluciones energéticas, incluyendo distintos tipos de tecnologías según el contexto local, haciendo que la transición también sea una transición de capacidades locales. Para lograrlo, se requiere una formación profesional, técnica y tecnológica, que no se limite a programas genéricos ni a cursos breves, y que contemple desde tareas básicas como la limpieza de paneles solares hasta componentes más complejos de operación y gobernanza.

En este marco, se resalta la importancia de que los procesos educativos incluyan la certificación de los espacios de formación que llegan al territorio, ya sean comunitarios, técnicos, prácticos o impulsados por instituciones educativas, autoridades públicas, organizaciones sociales o de cooperación. Más allá de valorar la formación en sus múltiples modalidades, se plantea la necesidad de que exista una conexión con instituciones educativas oficiales que brinden reconocimiento público a lo aprendido. Esto permitiría que estos procesos se articulen con programas académicos —cátedras, diplomados, especializaciones— y que el esfuerzo de formación tenga continuidad en trayectorias educativas más amplias y validadas oficialmente.

Al final, todos estos procesos deben comenzar desde la educación básica, para que la juventud pueda imaginar desde temprano oportunidades laborales distintas a las que tradicionalmente ha ofrecido la economía minera. Para avanzar en este propósito, resulta necesario articular los distintos niveles de formación —básica, técnica, tecnológica, profesional y comunitaria— evitando que funcionen de manera aislada o fragmentada. Se insiste en que la educación debe garantizar que la permanencia en el territorio sea una po-

sibilidad real, mediante procesos accesibles y flexibles, no necesariamente formales, que lleguen a las poblaciones rurales históricamente excluidas. En este esfuerzo, es prioritario acompañar más de cerca a la juventud, asegurando su acceso y participación en los procesos educativos. Esto no depende únicamente de la existencia de programas, sino de condiciones que permitan sostener las trayectorias educativas en el tiempo: acompañamiento, arraigo, sostenibilidad emocional, cultural, económica y tecnológica.

En cuanto a infraestructura, se propone aprovechar lo que ya existe, mientras se avanza en soluciones nuevas y adaptadas a contextos rurales. Antes de levantar nuevas sedes o moverse a modelos educativos remotos, debe garantizarse el acceso y permanencia educativa de quienes hoy no cuentan con estas facilidades.

Para lograr todo esto, los diversos actores coinciden en que estos esfuerzos formativos requieren de alianzas entre universidades, el SENA, centros técnicos, organizaciones comunitarias, el sector empresarial y gobiernos locales. Más que sumar nuevas ofertas, se trata de construir una estrategia compartida que responda a las necesidades reales del territorio. Esa estrategia debe partir de lo que ya se tiene al alcance, revisando buenas prácticas y lecciones aprendidas que permitan reconocer avances previos y aprovecharlos como base para nuevos procesos. En esa dirección, se propone la creación de una mesa de trabajo donde estas instituciones puedan encontrarse, dialogar y analizar conjuntamente lo que hoy está demandando el territorio. Para que estas conversaciones no se queden al interior de las universidades, sino que se abran a quienes habitan, conocen y sostienen los territorios cada día.



Primer Encuentro: Narrativas del Territorio, La Jagua de Ibirico, Abril 2025

SOSTENIBILIDAD ambiental desde el territorio

Entendida desde las **comunidades** es una oportunidad de **reparación y restauración**

Aunque mal implementada puede generar deterioro

Recomponer las relaciones con el agua, la tierra y la vida

Transformar territorios

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

Memoria

Educación ambiental

Negocios verdes

No hay consenso pleno

POMCA
POT PDM
Coordinación entre planes

Resolver disputas por la tierra

Desactualización de instrumentos

Acuerdos comunes

Activar y articular los instrumentos existentes

Tener en cuenta **saberes locales** para la planeación

Instituciones que aprenden de estos saberes

Incidencia real de la sociedad civil en la **PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**

Mecanismos de evaluación y seguimiento local

Asegurar financiamiento **PÚBLICO PRIVADO**

ESTABLECER **ZONAS NO NEGOCIABLES**

Acciones adaptadas a cada paisaje

Proteger **LIDERAZGOS AMBIENTALES**

Poner el **AGUA** en el centro de la **PLANIFICACIÓN**

Fortalecimiento de las **Prácticas tradicionales**

Proteger el suelo **AGRÍCOLA**

Clarificar la tenencia de tierras

Reconocer lo **ambiental** como parte de lo **social** y **productivo**

Agricultura agroecológica como motor de la **economía local**

La **protección de lo sagrado y lo natural** es una **conversación abierta** entre distintas formas de

Habitar el territorio

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DESDE EL TERRITORIO

Esa misma lógica de articulación y construcción colectiva también atravesó la dimensión ambiental de la transición energética. Desde la mirada de las comunidades, la transición es entendida como una oportunidad de reparación y restauración territorial. Sin embargo, también se advierte que, si no se implementa de forma cuidadosa y desde el territorio, puede convertirse en una nueva fuente de deterioro ambiental.

En un territorio atravesado por décadas de explotación minera, modelos agroindustriales, prácticas de ocupación del suelo no sostenibles como la ganadería extensiva, la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos y el conflicto armado, la sostenibilidad no se plantea como una aspiración, sino como una necesidad urgente. Esto implica, por un lado, recomponer las relaciones entre los distintos actores en la región, así como al interior de sus propios grupos; y por otro, restablecer el vínculo con el agua, la tierra y la vida, entendida como equilibrio ecosistémico y bienestar colectivo.

Desde esa visión, las comunidades que participaron en la construcción de esta narrativa plantean la posibilidad de transformar los territorios degradados en espacios productivos y vivos, con proyectos que entrelacen restauración, memoria, educación ambiental y negocios verdes. Viveros comunitarios, senderos ecológicos, espacios pedagógicos y la iniciativa de crear lo que lla-

maron el “Parque de la Vida” hacen parte de una apuesta integral que combina restauración ambiental, reparación simbólica y alternativas económicas sostenibles. Que la transición no se entienda como el cierre de minas, sino como la apertura de caminos de justicia ecológica que devuelvan sentido y futuro a los territorios degradados.

Sin embargo, no todos comparten esta visión. Se reconoce que la sostenibilidad ambiental enfrenta múltiples barreras: desde las disputas sobre la tenencia de la tierra y los conflictos no resueltos en procesos de restitución, hasta la falta de coordinación y articulación entre los instrumentos de planificación ambiental, de desarrollo y de ordenamiento territorial, como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). También persisten las superposiciones de figuras de ordenamiento, como las áreas regidas bajo la Ley Segunda de 1959 y los resguardos indígenas, que generan contradicciones normativas, por ejemplo en torno a los usos permitidos del suelo, la delimitación de áreas protegidas y la superposición de competencias institucionales, lo que a su vez produce vacíos de gestión.

La planificación ambiental no siempre encuentra cabida en la gestión municipal, lo que impide que estas propuestas se conviertan en políticas tangibles. Tampoco hay consenso sobre cómo integrar estos enfoques: mientras algunos actores defienden una planificación ambiental con mayor peso normativo, otros temen que esto pueda generar restricciones para ciertos proyectos estratégicos. A esto se suma la dificultad de articular las medidas ambientales ya vigentes, como la compensación por pérdida de biodiversidad, los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y los planes de cierre de mina, junto con fuentes de política y financiamiento como

las impulsadas por ministerios, el Sistema General de Regalías (SGR) y la cooperación internacional. Hoy, la mayoría de estos instrumentos se conciben desde la obligatoriedad y el cumplimiento, sin aportar a una apuesta territorial común y estratégica. La articulación, entonces, debería orientarse a construir ese bien mayor, de modo que las acciones de política, financiamiento y gestión ambiental se conviertan en parte de una estrategia compartida que aproveche las oportunidades del territorio.

Otro desafío estructural es que muchos municipios del Corredor aún cuentan con instrumentos de ordenamiento territorial desactualizados. Esta situación desvincula las actividades económicas de una planificación ambiental coherente, y limita la posibilidad de traducir las propuestas comunitarias en instrumentos concretos de gestión. A esto se suma la dificultad de sostener políticas ambientales de largo aliento en contextos de baja capacidad fiscal. Actualizar o articular instrumentos de planificación, supone procesos costosos y complejos que muchos territorios no pueden asumir solos.

Aunque no todas las posturas coinciden, hay acuerdos que delinear un horizonte común. La planeación ambiental no debe ser solo técnica: debe incluir los saberes que habitan en los caminos, en los ríos, en las prácticas cotidianas. Esa premisa ya ha comenzado a materializarse en algunos POMCA, formulados con participación de las comunidades. En su construcción se integró la mirada de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, lo que los convierte en insumos legítimos para orientar la sostenibilidad desde lo local. De ahí que, la revisión de estos planes, se reconoce como una oportunidad para incorporar estas miradas de sostenibilidad construidas desde el territorio, y alinear el desarrollo económico con una visión ambiental de largo plazo.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

El reto, entonces, no está en crear más instrumentos, sino activar y articular los que ya han sido contruidos desde y con los territorios. Se trata de lograr que se conviertan en herramientas vivas para la gestión, y no queden aislados de los esquemas normativos existentes. Hoy la conexión entre las instancias de participación ciudadana —como los Consejos Territoriales de Planeación (CTP)— y la incidencia real de la sociedad civil en los instrumentos de planificación territorial es limitada e insuficiente. Aunque existen formas de participación, la inclusión de las visiones y propuestas enfrenta barreras como procesos de homologación técnica exigentes, marcos jurídicos rígidos y una débil articulación entre los niveles municipal, departamental y nacional. A esto se suma que, muchas veces, las visiones comunitarias sobre el agua, el suelo o el bosque, contruidas desde cosmovisiones distintas, chocan con exigencias legales que no reconocen esa diversidad.

Por eso, más que una propuesta nueva, es un llamado a construir puentes entre lo comunitario y lo normativo, entre la visión local del territorio y los instrumentos que lo ordenan. Ese esfuerzo debe ir acompañado del reconocimiento de que la sostenibilidad no puede planearse sin formación en doble vía. En consecuencia, se plantea fortalecer tanto la educación ambiental, como la apropiación social del conocimiento ecológico de las comunidades y la formación técnica en restauración, manejo de cuencas y conservación. Esto debe partir de un proceso conjunto entre las comunidades y las autoridades ambientales, que incorpore mecanismos de evaluación local y seguimiento de proyectos para asegurar su efectividad y pertinencia en el territorio.

En esa misma línea, lo ambiental también implica responsabilidad ciudadana y la revisión de los procesos cotidianos que afectan el equi-

librio ecológico del territorio. Por eso, las acciones de educación ambiental deben comenzar desde el núcleo familiar, como un camino para reconectar la vida con los elementos de la naturaleza. Cada vez más, se comparte la convicción de que los recursos naturales no son infinitos, y que el uso racional de lo que queda comienza por reconocer su valor, aprender a protegerlo y hacerlo parte de una vida digna. Solo así estos proyectos podrán sostenerse más allá del discurso, enraizados en la gente que habita y cuida el territorio.

Al mismo tiempo, se ha puesto en evidencia que, sin agua, no hay transición posible. El agua debe estar en el centro de la planificación socioambiental. Su cuidado no es solo una preocupación ambiental, sino una necesidad vital para los modos de vida que coexisten en el territorio: la agricultura, la ganadería, los proyectos agroindustriales, las actividades extractivas, entre otros. No se trata solo de reparar el daño ambiental, sino de recuperar el vínculo entre las comunidades y los ecosistemas, fortalecer las prácticas tradicionales de manejo del agua y el suelo, y devolver sentido y vida a los espacios degradados. Un esfuerzo que combine acciones concretas como la restauración de cuencas hidrográficas, el pago por servicios ambientales (PSA) y la reforestación con especies nativas, junto con procesos educativos, mecanismos de protección legal y alternativas económicas basadas en la naturaleza.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa



Primer Encuentro: Narrativas del Territorio, La Loma, Abril 2025

Pero estas acciones solo tienen sentido si se adaptan al contexto ecológico, social y productivo de cada zona, porque en un corredor tan diverso como el del centro del Cesar, no todos los territorios pueden pensarse igual. No es lo mismo una finca en la serranía del Perijá que una en el bosque seco de Chiriguaná. Cada paisaje tiene sus propias dinámicas ecológicas, sociales y culturales. Por eso la sostenibilidad debe comenzar desde lo local, desde la finca, desde las prácticas cotidianas que cuidan el agua, el suelo y los ecosistemas vivos, como aquellas propias de la agricultura familiar o los sistemas agroforestales, que integran producción y conservación.

Planificar con el agua en el centro también implica mirar a largo plazo. Los cambios ecosistémicos no responden a ciclos cortos ni a periodos de gobierno, restaurar una cuenca puede tomar más de una década. Por eso, pensar la sostenibilidad requiere voluntad política, continuidad institucional y mecanismos de evaluación que acompañen los procesos en el tiempo. No basta con medir resultados inmediatos, se necesitan evaluar procesos, trayectorias y aprendizajes colectivos.

Solo si se trasciende la urgencia del corto plazo se podrán sostener en el tiempo las transformaciones que el territorio necesita.

En ese marco, surge con fuerza la necesidad de establecer zonas no negociables, que reconozcan la conexión ecológica, cultural y espiritual que sostiene el equilibrio del conjunto. Así como una cuenca depende de todas sus partes para fluir, estos espacios no pueden fragmentarse sin poner en riesgo el sistema que los rodea. Su definición, además, no puede ser genérica: lo que se considera no negociable desde el territorio puede significar algo distinto para una empresa minera, una compañía del sector hidrocarburífero o un proyecto agroindustrial.

En este escenario, aterrizar la sostenibilidad a la realidad del territorio exige reconocer sus límites y condiciones. Los conflictos que surgen de intereses económicos, ambientales y culturales sobre un mismo suelo o recurso dificultan la construcción de apuestas compartidas, pues no existen acuerdos ni visiones comunes. Tampoco se ha consolidado una apuesta común de política pública que oriente estas decisiones. A esto se suma la persistencia de la violencia, que no

solo limita las posibilidades de avanzar, sino que también ha impedido consolidar iniciativas colectivas. Por otra parte, los líderes y lideresas ambientales, que día a día sostienen la defensa del agua, la tierra y los ecosistemas, enfrentan un riesgo permanente. Protegerlos implica brindar garantías frente a amenazas, reconocer públicamente su valor y asegurar respaldo institucional y comunitario.

Por eso, si no se acompaña de acuerdos realistas y de mecanismos que reconozcan las tensiones del territorio, la definición de zonas no negociables puede resultar inviable en la práctica. En esa medida, las propuestas que se formulen deben estar alineadas con los marcos de ordenamiento vigentes, de modo que puedan convertirse en políticas viables. Asumir estas dificultades no significa renunciar a la sostenibilidad, sino construirla desde lo posible, sin idealizaciones que desconozcan los tiempos, los conflictos y las disputas económicas que atraviesan la región.

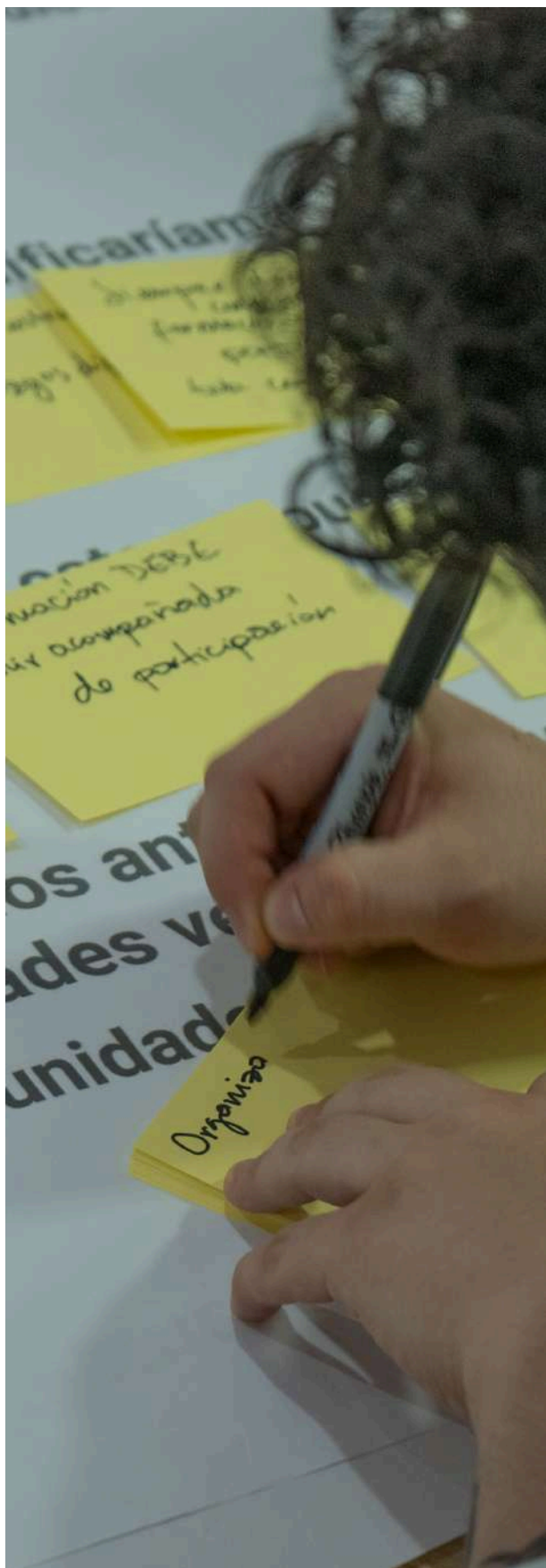
Para que estas propuestas sean viables, se requiere acompañamiento constante por parte de las autoridades ambientales, así como con un compromiso real del Estado, en particular de las entidades encargadas del ordenamiento territorial, para reglamentar estos procesos de forma coherente con las realidades locales. Ese compromiso también implica asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales por parte de las empresas extractivas, y fomentar la participación activa de las comunidades en su seguimiento, ya sea como terceros intervinientes o mediante monitoreos ambientales participativos. En esa dirección, se propone avanzar hacia mecanismos de financiamiento público-privado y modelos de gobernanza que aseguren continuidad, incluso en medio de los ciclos políticos, que no dependan exclusivamente de recursos estatales o de cooperación internacional.

Al mismo tiempo, los procesos de sostenibilidad deben pensarse más allá de lo ambiental: como procesos económicos, sociales y culturales que reactiven el tejido productivo local. En ese horizonte, la reactivación agrícola con prácticas sostenibles y agroecológicas aparece como una forma concreta de fortalecer la economía local, integrando la sostenibilidad ambiental con la economía territorial. Se reconoce que la sostenibilidad económica está estrechamente vinculada con la conservación, y que avanzar hacia este tipo de modelos exige flexibilidad, apertura y la construcción de consensos que beneficien al conjunto del territorio.

Esta integración productiva también requiere mirar hacia el campo, donde la reactivación agrícola es una apuesta prioritaria frente al desempleo y la inseguridad alimentaria. Para esto, se propone proteger el suelo agrícola y fomentar la agroecología, retomando lo ya señalado sobre la planificación del territorio: el uso del suelo debe definirse de forma participativa, articulando los instrumentos de ordenamiento con los enfoques de sostenibilidad contruidos desde el territorio.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa



La presión sobre la tierra es real, y sin una planificación coordinada —ambiental, productiva y energética— existe el riesgo de que se escalen conflictos existentes o generen otros nuevos.

En ese sentido, se pone sobre la mesa una pregunta: ¿cómo se protege la tierra sin dividir al territorio? El reconocimiento de sitios sagrados, zonas de reserva y otras formas de valor cultural y ecológico del territorio concentra tensiones aún no resueltas. Para que estas iniciativas prosperen, se debe avanzar en la clarificación de la tenencia y el uso del suelo. Aquí no hay consenso pleno: mientras algunos defienden la protección de estos espacios como una condición ética y ambiental, otros alertan sobre las restricciones que podrían imponer al desarrollo económico y la ejecución de proyectos estratégicos o incluso sobre la propiedad privada, donde lo particular entra en tensión con lo colectivo. Esta tensión deja claro que la protección de lo sagrado y lo natural no es solo una decisión normativa, sino una conversación aún abierta entre distintas formas de habitar y proyectar el territorio.

Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

DIVERSIFICACIÓN con raíces en el territorio

Redefinir la **economía** rescatando la **identidad local**



DIVERSIFICACIÓN CON RAÍCES EN EL TERRITORIO

La transición energética también ha puesto sobre la mesa el desafío de redefinir la economía. En este nuevo escenario, emergen tensiones y apuestas que revelan la complejidad de replantear el modelo productivo sin romper con la identidad productiva ni las realidades locales. En el Cesar, el rol del carbón sigue siendo un tema divisivo. Mientras algunas voces defienden su continuidad como base de la economía local, otras plantean la necesidad de una salida gradual para dar paso a otros modelos. También hay diferencias sobre la viabilidad inmediata de ciertas propuestas productivas, y el ritmo con el que deben implementarse algunas transformaciones.

A pesar de estas tensiones, se comparte la convicción de que el cierre minero debe estar articulado con una transición energética y económica que no sacrifique las vocaciones productivas del suelo, sino que las proteja y potencie como parte de una estrategia integral. En este contexto, cobra fuerza la necesidad de imaginar una economía que no reemplace abruptamente unas actividades por otras, sino que diversifique con arraigo y con sentido de sostenibilidad. Esto supone evitar los monocultivos productivos y reconocer que el campo no está vacío ni necesita ser salvado, sino reactivado con base en las dinámicas agropecuarias ya existentes.

Desde esta perspectiva, la diversificación económica se convierte en el punto de encuen-

tro donde aterrizan y se articulan los procesos de gobernanza, sostenibilidad ambiental y educación que sustentan una transición energética con sentido territorial. Solo cuando estas dimensiones se encuentren en apuestas estructurales que hagan viables y sostenibles las iniciativas productivas, puede comenzar a transformarse desde el territorio la estructura económica que ha sostenido históricamente al Corredor del Cesar.

Reactivar el campo no es volver al pasado, sino transformar el presente con raíces profundas y una mirada estratégica de futuro. En este horizonte, la necesidad de fortalecer la institucionalidad agraria local, facilitar el acceso a medios de producción y acompañar las iniciativas comunitarias con formación técnica, inversión y alianzas sostenidas se concreta en una apuesta estratégica y holística, que busca hacer posible que la permanencia en el territorio sea una decisión viable, digna y deseable.

Cualquier transformación económica requiere una articulación coherente entre las agendas nacionales, regionales y locales, que evite contradicciones y contribuya efectivamente a la sostenibilidad del territorio. Para que los nuevos proyectos no terminen desplazando otras formas de vida, es necesario definir con claridad quiénes se encargan, cómo se implementan estas apuestas y bajo qué condiciones se garantiza su continuidad en el tiempo. No se trata solo de proponer qué hacer, sino de asegurar que exista una arquitectura institucional sólida, recursos suficientes y compromisos duraderos para sostener los cambios necesarios.

Para avanzar, como una de varias apuestas posibles, se propone iniciar pilotos agroecológicos adaptados a las condiciones locales, que permitan explorar alternativas sostenibles vinculadas a las dinámicas territoriales. Estos ejercicios servirían como base para ensayar mo-



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

delos replicables de producción limpia, articulados con el conocimiento local, las vocaciones del suelo y las dinámicas comunitarias. Su implementación requiere identificar zonas con potencial, articular esfuerzos institucionales y establecer mecanismos de evaluación conjunta desde el inicio.

En esa misma dirección, una economía local fortalecida se imagina con centros de acopio en manos de las comunidades, ubicados donde realmente se produce. Espacios vivos que reduzcan la intermediación, dinamicen los mercados cercanos y permitan que lo cultivado llegue directamente a quienes lo necesitan. Que lo que se cosecha en el campo

no tenga que atravesar diez manos antes de alimentar. Estos centros no solo serían espacios logísticos, sino nodos de organización comunitaria, sostenidos por procesos de formación técnica, cooperativas sólidas y estrategias de comercialización justa.

Para que esta visión se materialice, se requiere inversión pública y privada, acompañamiento técnico continuo y voluntad institucional que integre estas iniciativas dentro de una estrategia territorial más amplia. Esto implica, además, asegurar canales efectivos de comercialización e integrar estas apuestas con la demanda real de actores locales, sectoriales y empresariales del entorno, de modo que los productos no solo se cultiven, sino que también encuentren salida y sostenibilidad en el mercado, superando barreras como la falta de infraestructura básica en las zonas rurales. Sin eso, corren el riesgo de quedarse en el discurso o en infraestructuras abandonadas por falta de gestión y comercialización efectiva.

El turismo también emerge como una alternativa, aunque no exenta de condiciones. Se sueñan modelos de turismo rural gestionados por las propias comunidades, donde el paisaje, la memoria y la biodiversidad también pueden generar sustento. Senderos restaurados que cuenten historias y siembren pertenencia, parques agroecológicos que combinen formación, producción limpia y valorización del territorio. Aunque hoy existen limitaciones evidentes como la falta de vías, infraestructura hotelera y hospitalaria, conectividad, condiciones de seguridad, el turismo sigue siendo una visión de largo plazo que despierta interés en diversos sectores.

La sostenibilidad de estas iniciativas dependerá de su articulación con otras actividades económicas, del fortalecimiento institucional y del compromiso real con la diver-

sificación. No se trata de reemplazar otras economías, sino de imaginar nuevas formas de habitar y cuidar el territorio, donde estas iniciativas sean una entre varias alternativas construidas desde el arraigo.

Más allá de los proyectos económicos específicos, la confianza en el proceso de transición dependerá de cómo se defina el papel del carbón en el futuro del territorio. La diversificación productiva y la descarbonización son hoy dos de los temas más sensibles del debate, y su gestión marcará el tono de lo que viene: si la transición se construye colectivamente con sentido territorial o se percibe como una imposición que profundiza la desconfianza.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

ENERGÍA para la transformación territorial

La TEJ debe ser un proceso **entrelazado** con la **realidad local**



CULTURAL

SOCIAL

ECONÓMICA

AMBIENTAL

Desde lo local

La energía no debe ser un cambio de fuente sino un **bien común** al servicio de la vida

La transformación se construye de manera **COLECTIVA**

Desafíos nacionales y globales



El mal manejo puede...



¿Impacto de los proyectos?

¿Baja generación de empleos?



La energía debe ir acompañada de **redes productivas**

Por sí sola no puede ser el nuevo pilar de desarrollo

EMPLEO DIGNO
ECONOMÍAS LOCALES
COMPENSACIÓN DE IMPACTO

Articulación con **apuestas de territorio**



Romper la confianza

Generar frustración

Escalar conflictos



SERVICIOS COMUNITARIOS

AGROINDUSTRIA

TURISMO

La comunidad como **PROTAGONISTA** No sólo beneficiaria



RECICLAJE

EMPRESAS COMUNITARIAS



MANTENIMIENTO

PREVENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Involucrada en las decisiones

Preparada para la operación

Estrategias de cuidado y seguimiento

Gestión de **sistemas energéticos**

Intergeneracional e incluyente, basada en liderazgo genuino

INFORMACIÓN CLARA

- Entender la **cadena energética**
- Garantizar **tarifas accesibles**
- Transformar la cultura de **no-pago**

Compromiso, arraigo y corresponsabilidad

ENERGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

Todo esto invita a seguir pensando la transición energética no como un conjunto de componentes aislados, sino como un proceso entrelazado con las realidades sociales, culturales, económicas y ambientales del territorio. Porque la energía, por sí sola, pierde sentido si no se articula con las condiciones materiales de vida de las personas, con sus formas de producción, de sustento y de habitar.

La transición energética no se trata solo de cambiar la fuente, sino de poner la energía al servicio de la vida. Esto implica repensar para qué y para quién es la energía. Para avanzar en esa dirección, se necesita una mirada compartida: la transición no puede construirse desde un solo lugar, sino a partir de un proceso colectivo en el que cada actor, desde su rol y responsabilidad, forme parte activa del mismo. Más allá de la generación de electricidad, lo que está en juego es si esta transición puede realmente superar el modelo extractivista y avanzar hacia una visión donde la energía sea un bien común. Esa transformación debe partir de las realidades locales, pero también contribuir a responder a desafíos más amplios que se plantean en el plano nacional y global.

Desde los municipios del Corredor del Cesar, ya se empiezan a proyectar formas distintas de pensar la generación de electricidad, más conectadas con las realidades locales y con un deseo de transformación que también reconoce los desafíos que trascienden lo local.

En este contexto, los proyectos energéticos se piensan como herramientas para impulsar el desarrollo económico, fortaleciendo procesos productivos como la agroindustria, el turismo rural o los servicios comunitarios con el objeto de contribuir a mejorar el bienestar de sus habitantes. Las comunidades insisten en que los beneficios deben aportar a las apuestas construidas desde lo local, y que los proyectos de generación de energía solo tienen sentido si incluyen a quienes habitan y sostienen esta región. Desde ahí, lo territorial deja de ser un asunto aislado y empieza a dialogar con las transformaciones que el país necesita.

Ahora bien, pensar la energía como motor de transformación exige una mirada realista y aterrizada. La generación de electricidad, por sí sola, no puede ser el nuevo pilar del desarrollo. Su capacidad para generar empleo directo es limitada y se concentra mayormente en las fases iniciales del proyecto. Antes de avanzar, es necesario entender si los beneficios derivados de estos proyectos realmente compensan los impactos que estos mismos podrían generar. En ese sentido, se deben establecer acciones como el análisis y el acceso a información sobre cómo los proyectos podrían afectar el entorno, los medios de vida y las dinámicas locales, así como la implementación de sistemas de monitoreo participativo que permitan hacer seguimiento a sus efectos positivos y negativos.

Un mal manejo, expresado en la falta de planificación territorial, la ausencia de información, un seguimiento institucional insuficiente, expectativas sobredimensionadas o una distribución inequitativa de beneficios, podría no solo desaprovechar el potencial que tiene el territorio para desarrollar proyectos energéticos, sino también romper la confianza en el proceso de transición. Además, sin una articulación clara con cadenas productivas locales y regionales, redes logísticas y mode-



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

los de negocio sostenibles, la transición corre el riesgo de no solo convertirse en una promesa vacía, sino de generar frustraciones y conflictos en las comunidades.

La generación de electricidad puede convertirse en una palanca para dinamizar procesos productivos locales, siempre que exista una articulación real con las dinámicas económicas y productivas. Pero esta coordinación no ocurre de manera aislada: se sustenta en los procesos colectivos de gobernanza, educación, sostenibilidad ambiental y diversificación productiva ya descritos. Solo así, la llegada de nuevas tecnologías para la generación de energía renovable podrá traducirse en oportunidades reales para los territorios: empleo digno, fortalecimiento de economías locales, agrotransformación y emprendimientos comunitarios con raíces sociales y ambientales.

En ese sentido, se insiste en la necesidad de conectar los proyectos de generación de energía con estrategias que vinculen a las comunidades no solo como beneficiarias, sino como protagonistas de los cambios: involucradas en las decisiones, preparadas para operar las tecnologías y organizadas para

participar en la gestión y sostenimiento de los sistemas energéticos. Esta apuesta, estrechamente ligada a los procesos formativos y al fortalecimiento de capacidades locales, también implica fomentar la creación de empresas comunitarias que ofrezcan servicios como mantenimiento, reciclaje de paneles solares, eficiencia energética, gestión de biomasa o monitoreo ambiental para la generación de energía, entre otros, según el tipo de tecnología que se implemente en el territorio. A su vez, esta visión se extiende a otras dimensiones como la gobernanza, la articulación productiva, la innovación social y la sostenibilidad económica.

A esto se suma la importancia de abordar los impactos ambientales que pueden derivarse de los proyectos energéticos, anticipando y mitigando los efectos generados durante su construcción, operación o desmonte. La instalación de infraestructuras como parques solares, líneas de transmisión o plantas de biomasa puede afectar la cobertura vegetal, la biodiversidad local o la calidad del aire. Por eso se plantea aumentar la participación comunitaria en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y en el seguimiento a las

obligaciones ambientales, como parte de una transición energética que integre estrategias de cuidado y restauración ambiental, con monitoreos participativos, medidas de prevención y acciones reparadoras. Estas estrategias deben garantizar que el avance tecnológico no reproduzca las prácticas del pasado que generaron conflictos socioambientales en la región, ni produzca nuevas vulnerabilidades en los territorios.

A su vez, para que estos procesos realmente echen raíces, es importante que la formación tenga un enfoque intergeneracional y de inclusión efectiva, que permita a jóvenes, mujeres, campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes asumir roles diversos en los procesos de generación de energía y productivos. Incluir a poblaciones históricamente excluidas es parte de una apuesta por la justicia y la equidad; sin embargo, también se reconoce que priorizar su participación únicamente por su pertenencia identitaria, sin tener en cuenta las capacidades y el compromiso necesarios, puede debilitar los procesos. Muchas iniciativas fracasan cuando solo una parte del grupo cuenta con las capacidades y el compromiso, mientras otras personas esperan beneficios sin involucrarse. Por eso, la inclusión debe ir acompañada de un liderazgo genuino y capacidades concretas, que sostengan las iniciativas más allá de los apoyos externos y las convierta en procesos viables y duraderos.

Se insiste en que la transición energética solo será justa si se construye sobre información clara, accesible y compartida. Conocer cómo se diseñan los proyectos, quiénes los ejecutan, cuáles son sus beneficios y cómo se evalúan sus impactos es una condición para avanzar con transparencia y generar confianza. Sin datos comprensibles sobre tarifas, pasos requeridos para su licenciamiento, y condiciones de sostenibilidad, se dificulta el diá-

logo y se profundiza la distancia entre quienes deciden y quienes habitan el territorio. La información no puede ser un privilegio técnico, debe ser un derecho que permita la participación y contribuya a proyectar el futuro energético desde la realidad territorial.

Del mismo modo, garantizar costos y tarifas accesibles hace parte de una transición que busque transformar las condiciones de vida de las personas. La posibilidad de contar con tarifas estables y justas es tan importante como la tecnología que se implemente o la fuente que se utilice. En muchos municipios del corredor, el alto costo del servicio eléctrico ha generado malestar, endeudamiento y exclusión, afectando directamente las condiciones de vida de las familias. Por eso, pensar la energía como un derecho y no como un lujo implica que los beneficios de los nuevos proyectos se traduzcan en menores costos para quienes habitan el territorio. La justicia energética también se mide en la capacidad real de las personas para acceder y usar la energía sin que eso comprometa su bienestar.

A esto se suma la urgencia de transformar prácticas cotidianas que limitan la sostenibilidad del sistema energético en el largo plazo. Una de ellas es la persistente cultura del no pago del servicio eléctrico, que refleja no solo condiciones económicas difíciles, sino también desconfianza, desinformación y escasa apropiación sobre el valor y funcionamiento de la energía.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

Comprender toda la cadena —desde la generación hasta el consumo— permite construir corresponsabilidad y sostenibilidad. No se trata solo de pagar por el servicio, sino de usarlo de manera consciente, reduciendo consumos innecesarios y promoviendo hábitos que cuiden lo común. La energía no puede seguir siendo entendida únicamente como un servicio que se recibe, sino como parte de un proceso colectivo que requiere compromiso. Sin esta comprensión, difícilmente podrá sostenerse una transición que promueva el arraigo, el cuidado del territorio y la construcción de modelos viables a largo plazo.

No todo está dicho, persisten tensiones que reflejan la complejidad del proceso. Pero en medio de esas diferencias, hay algo más fuerte: el deseo compartido de que la transición energética no sea solo un proyecto, sino un proceso digno. Que no sea una historia

contada desde afuera, sino una construcción viva, dialogada y situada. Este relato no es el final, sino una invitación a seguir andando, con la mirada puesta en un horizonte común y con las manos de quienes cultivan, cuidan, resisten y sueñan el futuro del territorio, un horizonte que sólo será justo si lo caminamos juntos.



Tercer Encuentro: Narrativas del Territorio, Valledupar, Agosto 2025. Foto: La Rotativa

Organizaciones que hicieron posible este proceso

La construcción de la Narrativa de la TEJ en el Corredor del Cesar fue posible gracias al trabajo articulado de diversas organizaciones que aportaron su experiencia, metodologías y acompañamiento territorial:

Centro Insuco para la Innovación Social (ICSI– Insuco Center for Social Innovation)

ICSI es un centro de pensamiento para la acción, que busca construir puentes entre la investigación en ciencias sociales y el aprendizaje territorial. Su enfoque es acompañar de manera sostenible grandes transiciones, promover decisiones informadas e impulsar la acción colectiva. A través de su trabajo, fortalece la innovación social y la incidencia multisectorial, vinculando a la academia, las comunidades y el sector privado en procesos de transformación territorial.

Observatorios de Transformaciones Territoriales (OTT)

Los OTT son una iniciativa privada liderada por el Centro Insuco para la Innovación Social (ICSI) y apoyada por la Fundación Ford, con presencia en Colombia, Ecuador y Perú. Funcionan como centros de gestión del conocimiento que recopilan y analizan información sobre territorios en transformación y promueven su apropiación social mediante espacios de diálogo multiactor. Su propósito es facilitar la construcción de una visión territorial compartida y acompañar procesos de transformación con legitimidad y arraigo local.

Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira (PDPCG)

El PDPCG es una organización de la sociedad civil que acompaña procesos de desarrollo humano integral y paz territorial en los departamentos del Cesar y La Guajira. Fue creado en 2010 con el propósito de promover “La Vida Querida” mediante diálogos territoriales, formación comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza local. Actualmente, a través de la Escuela para las Transiciones Territoriales del Cesar y La Guajira, impulsa procesos educativos que articulan saberes locales, diálogo social y la construcción de sujeto político territorial.

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

EITI es el estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y la minería. Su implementación está a cargo de un grupo multiactor que reúne a representantes de la sociedad civil, el gobierno y el sector privado en cada país donde se implementa. El objetivo es divulgar información sobre el sector extractivo, promover el debate público y aportar insumos para una mejor toma de decisiones.



NARRATIVA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN EL CORREDOR DEL CESAR

Este documento recoge la visión compartida de la Transición Energética Justa, construida a partir de diálogos con comunidades, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en el Corredor del Cesar



Observatorio de
**Transformaciones
Territoriales**



ICS



INSUCO



PROGRAMA DE
DESARROLLO Y PAZ
DEL CESAR Y LA GUAJIRA
Seguridad Humana y Desarrollo Integral
en territorios con alta vulnerabilidad



**Ford
Foundation**